

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 5
O R D I N A R I A
JUEVES 10 DE ENERO DE 2013

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta minutos del jueves diez de enero de dos mil trece, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

A continuación, el señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Proyecto de acta de la sesión pública número cuatro, ordinaria, celebrada el martes ocho de enero de dos mil trece.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Sesión Pública Núm. 5

Jueves 10 de enero de 2013

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el diez de enero de dos mil trece:

II. 1. 947/2011

Amparo directo en revisión 947/2011 promovido por ***** en contra de la sentencia dictada el tres de diciembre de dos mil ocho, por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo DP.-425/2010. En el proyecto formulado por el señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se propuso: *“PRIMERO. En la materia de la revisión, competencia de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***** , en contra de las autoridades y actos precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria”*.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea expuso una síntesis de las consideraciones de su proyecto.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno los considerandos primero “Competencia”; segundo “Oportunidad”; tercero “Procedencia”; y cuarto “Cuestiones necesarias para resolver el recurso”, los cuales se aprobaron por unanimidad de once votos.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando quinto “Análisis de los agravios. i) Análisis de la constitucionalidad del artículo 124 del Código Penal para el Distrito Federal”, en cuanto

propone declarar fundado el agravio en el que el recurrente aduce que el Tribunal Colegiado, al analizar el planteamiento de constitucionalidad relativo a que dicha disposición viola las garantías de exacta aplicación de la ley y de observancia de las formalidades esenciales del procedimiento, al no prever un plazo dentro del cual se deben tener las lesiones como mortales, no se limitó a realizar una confronta entre el tipo penal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que para declarar la constitucionalidad del citado precepto, al considerar inaplicable la tesis aislada P. VIII/95, sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendió los hechos concretos por los cuales fue sentenciado el hoy quejoso.

El señor Ministro ponente Zaldívar indicó que al haber quedado expuesto el considerando en la presentación del asunto, prefería escuchar los planteamientos de los señores Ministros.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas refirió que la propuesta pretende abandonar el criterio aislado de rubro “LESIONES. LA OMISIÓN EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, DE PREVER UN PLAZO DENTRO DEL CUAL SE DEBEN TENER COMO MORTALES, VIOLA LAS GARANTÍAS DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY Y DE OBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO” aprobado por mayoría de siete votos, ante lo cual consideró que dicho criterio es aplicable al caso concreto toda vez que

el artículo 124 del Código Penal para el Distrito Federal no cumple con la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal al no fijar el plazo dentro del cual una lesión debe ser considerada como mortal, lo que propicia el riesgo de confusión para la tipificación de la conducta delictuosa e imposición de la pena, con lo cual vulnera la garantía de defensa del procesado.

Manifestó que conforme al precepto, las lesiones deben considerarse como mortales cuando se actualice como consecuencia el delito de homicidio. Asimismo, se refirió al concepto de lesiones en nuestra legislación y a la diferencia entre éste y el diverso de homicidio.

Por ende, estimó relevante en acatamiento a la garantía prevista en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, establecer las características y condiciones requeridas para que una lesión deba ser considerada mortal, es decir, causante de la muerte del lesionado, pues de ello dependerá si el sujeto activo será procesado por el delito de lesiones o por el diverso de homicidio, según el caso.

Indicó que la mayoría de las legislaciones locales definen como lesión mortal “aquella que causa la muerte debido a las alteraciones de los órganos afectados o a sus consecuencias inmediatas o debido en ciertas hipótesis a complicaciones derivadas de la propia lesión”, en tanto que otras específicamente prevén que para que la lesión sea

considerada como mortal, la muerte se debe producir dentro de cierto período desde se causó la lesión respectiva.

Por ende, manifestó que para cumplir con la garantía señalada, la ley penal debe prever los requisitos que son necesarios para considerar que una lesión es mortal, así como el plazo a partir de que se tiene la lesión y dentro del cual se produzca la muerte por dos razones: primero, porque la certeza de la relación de causalidad entre las lesiones y la muerte requiere del señalamiento de una dimensión temporal que debe establecerse por el legislador, cuya omisión implicaría la imprecisión de la temporalidad dentro de la cual opera legalmente dicha vinculación y la pérdida de certidumbre o seguridad para los gobernados; y, segundo, porque la necesidad de fijar el término referido deriva de razones procesales que trascienden a la defensa del inculpado, pues conforme a lo previsto en el reformado artículo 20, Apartado B, fracción VII, constitucional, el inculpado debe ser juzgado antes de cuatro meses tratándose de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la pena excediera de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.

Señaló que la indefensión se puede producir por la incertidumbre derivada de la falta de certeza de los hechos que habrán de imputarse al procesado.

Recordó que la prescripción extingue la acción penal y las sanciones con el simple transcurso del tiempo señalado

en la ley y comenzará a contarse a partir de la consumación del delito en caso de ser instantáneo; desde el día en que se realizó la última conducta tratándose de los delitos continuados o, en su caso, desde la cesación de la consumación si se está ante un delito permanente, cuya base será el término medio aritmético de la pena de prisión que señale la ley para cada delito, para lo cual se refirió al artículo 11 del Código Penal para el Distrito Federal.

En relación con el diverso 130, fracción VII, del código señalado, que prevé la pena de tres a ocho años de prisión a quien infiera una lesión que ponga en peligro la vida, consideró que dicha situación permite establecer la posibilidad de que al autor del delito de lesiones que ponen en peligro la vida, se le inicie el procedimiento respectivo transcurrido un lapso prolongado aunque no suficiente para la prescripción de la acción penal y tuviera lugar el deceso del lesionado, lo que lo llevaría a un estado de indefensión, pues el transcurso del tiempo implicaría que fuese casi nugatorio cualquier procedimiento que garantizara la audiencia del imputado ante la dificultad de obtener y aportar oportunamente las pruebas idóneas tendentes a demostrar la inexistencia de los supuestos previstos en el precepto que se tilda de inconstitucional, además de que se podría colocar a la autoridad jurisdiccional en un estado de incertidumbre vulnerando la garantía de seguridad jurídica, por lo que se manifestó por la inconstitucionalidad del precepto impugnado.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó a favor del sentido del proyecto, tal como lo hizo al abordarse en la Primera Sala de este Alto Tribunal y señaló algunas precisiones que en caso de no ser incorporadas al proyecto, reservaría su derecho para elaborar voto aclaratorio.

Se refirió a las razones históricas por las cuales se determinó en el Código de Martínez de Castro, que como consecuencia de una lesión, las personas fallecían en un plazo de sesenta días, ante lo cual, algunos Estados determinaron ampliar el plazo hasta noventa días.

Manifestó que de acuerdo con los avances en medicina y patología forense, así como en criminalística, se han transformado los argumentos relativos a la identificación de las condiciones de muerte, por lo que consideró que esa razón histórica no es suficiente para continuar sosteniendo ese criterio.

Estimó que debe distinguirse entre los conceptos de imputabilidad médica y causalidad jurídica y definió cada uno. Asimismo puso a disposición del señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea las fuentes para resolver el problema en una doctrina médica general, para lo cual existen las teorías de la *conditio sine qua non*, de la causalidad adecuada y de la causalidad humana.

Manifestó que la teoría de la *conditio sine qua non*, se basa en que la conducta es causa del resultado cuando sin alguna circunstancia especial éste no se habría producido; la

teoría de la causalidad adecuada, considera que los efectos de la acción no son causados por el hombre; y por último, la teoría de la causalidad humana se considera intermedia, en la cual el hombre responde de los resultados causados con sus acciones.

Indicó que tal como lo afirma el proyecto, los avances de la ciencia y el desarrollo de la medicina permiten conocer de manera precisa las causas de la muerte del sujeto pasivo, por lo que no es necesario precisar el término dentro del cual deba producirse ésta.

Refirió el caso en que la Suprema Corte de los Estados Unidos estableció la abolición de la antigua regla del *common law* conocida como “Un año y un día más”, ya que la misma se remontaba al siglo XIII donde se atendía a la imposibilidad de la ciencia médica para establecer la causa de la muerte cuando había pasado una gran cantidad de tiempo entre la lesión y el deceso, al determinar que los avances de la medicina han superado este problema.

Consideró que el tema de la temporalidad ha sido abandonado a partir de los avances médicos que resuelven el problema existente en épocas anteriores, lo que implica una carga mayor a los Ministerios Públicos, a las policías, a los servidores forenses de los Estados y a los Tribunales, al tener que establecer el nexo causal entre las lesiones, por lo que se manifestó a favor del proyecto y señaló algunas

Sesión Pública Núm. 5

Jueves 10 de enero de 2013

precisiones que en caso de no ser incorporadas, reservaría su derecho para elaborar voto aclaratorio o concurrente.

El señor Ministro Valls Hernandez se pronunció a favor de la propuesta del proyecto, al estimar que la temporalidad obedeció a cuestiones de experiencia fáctica y a los avances científicos. Por ende consideró infundados los agravios sostenidos por el quejoso.

Se manifestó de acuerdo con el abandono del criterio sostenido en la tesis aislada sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal ya que los postulados en los que se basó resultan obsoletos.

La señora Ministra Luna Ramos se pronunció a favor del sentido del proyecto y señaló tener observaciones de carácter técnico que plasmará en un voto aclaratorio o concurrente.

Indicó los antecedentes del caso y refirió dos argumentos de la parte quejosa al promover el amparo directo en revisión; el primero, consistente en la aplicación de la tesis del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el segundo, en la inconstitucionalidad del artículo 124 del Código Penal del Distrito Federal al no contar con punibilidad remitiendo a otros artículos para la pena correspondiente, violando el diverso 14 constitucional al imponer la pena por mayoría de razón o por analogía.

Sesión Pública Núm. 5

Jueves 10 de enero de 2013

Expuso de manera pormenorizada las actuaciones del Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo.

Por ende, consideró inoperantes los agravios expresados por el quejoso relativos a la aplicación de la tesis de este Alto Tribunal al consignársele por el delito de homicidio y no por el de lesiones.

Dio lectura al artículo 130 del Código punitivo citado y reiteró que se consignó al quejoso por el delito de homicidio y no por el diverso de lesiones, por lo que estimó que los agravios devienen inoperantes y precisó que plasmaría su argumento en un voto concurrente.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea aceptó incorporar los argumentos del señor Ministro Cossío Díaz al considerarlos plausibles e interesantes.

Señaló no compartir la postura de la señora Ministra Luna Ramos, toda vez que estimó fundados los agravios del quejoso, ya que el análisis de la constitucionalidad de una norma de carácter general debe llevarse a cabo desvinculado del caso concreto; e indicó que un tema consiste en si se aplicó o no la norma y otro en la constitucionalidad o no de la misma.

Agregó que ha sido criterio reiterado de la Primera Sala el no calificar los agravios como inoperantes en materia penal, aun y cuando no exista pronunciamiento específico,

ya que en suplencia de la deficiencia de la queja se tendrá que realizar.

Señaló no estar de acuerdo con lo expresado por la señora Ministra Sánchez Cordero de Garcia Villegas e indicó que es distinto el tipo de la causalidad que da lugar o no al homicidio. Indicó que se establecería con mayor claridad en el proyecto que no existe inseguridad jurídica, porque una vez que concluye el proceso y se dicta sentencia en cualquier sentido no es posible juzgar posteriormente por los mismos hechos.

El señor Ministro Pardo Rebolledo se manifestó a favor del sentido del proyecto e indicó que el asunto que se encuentra listado a continuación bajo su ponencia toca esencialmente el mismo tema.

Manifestó compartir los razonamientos de los señores Ministros que lo han precedido en el uso de la palabra, y propuso al señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea agregar al proyecto el argumento relativo a que no es necesario que el precepto establezca un plazo para garantizar la seguridad jurídica y respetar los requisitos que debe tener el tipo penal en un proceso de esa naturaleza.

Señaló que en el proyecto que está bajo su ponencia se establece que el plazo natural en estudio se surte en tanto se encuentra en trámite el juicio penal; sin embargo, si en el transcurso del mismo fallece la persona como consecuencia de una relación de causa-efecto entre la lesión

que fue causada y su muerte, el plazo natural para llevar a cabo esta reclasificación correrá en tanto se encuentre en trámite el proceso penal respectivo, por lo que sugirió al señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea incorporar en sus argumentaciones esta circunstancia.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas recordó que el asunto fue discutido en la Primera Sala y manifestó su preocupación por la falta de oportunidad del quejoso para demostrar los hechos que está enfrentando en un proceso penal sin un plazo determinado.

A fin de estar en posibilidad de pronunciarse respecto del fondo del asunto, la señora Ministra Luna Ramos solicitó que se votara el tema previo que planteó en relación con declarar la inoperancia de los agravios. Cuestionó que en suplencia de la deficiencia de la queja se estudien y no se le dé la razón al quejoso.

Estimó que debía declararse que son inatendibles los agravios ya que en materia penal no se declara su inoperancia.

El señor Ministro Presidente Silva Meza manifestó que se llevaría a cabo una votación una vez que se estimará suficientemente analizado el tema. Ante ello, la señora Ministra Luna Ramos señaló que su solicitud derivó de que estimó que se estaba abordando el fondo del asunto.

El señor Ministro Presidente Silva Meza recordó que en el presente caso se está ante la reasunción de competencia del Tribunal Pleno, en función del abandono de un criterio contenido en una tesis aislada y de que la integración de este Alto Tribunal es diferente. Indicó que para definir lo anterior debían continuarse escuchando los argumentos, a fin de tomar una votación integral, quedando en libertad los señores Ministros de pronunciarse en los términos que consideraren pertinentes.

En ese tenor, el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, manifestó que al tomarse la votación sobre el tema cada uno de los señores Ministros podrá, en su momento, formular las salvedades pertinentes. Señaló que se había referido a la suplencia de la deficiencia de la queja para efectos de la inoperancia, pero que desde su perspectiva existe un agravio y la aplicación del precepto en perjuicio.

En relación con la sugerencia del señor Ministro Pardo Rebolledo, aceptó incorporar el argumento en relación con el plazo en el proceso. Ofreció una disculpa al señor Ministro Valls Hernández por omitir agradecerle sus comentarios y su opinión favorable al proyecto.

El señor Ministro Franco González Salas, sin abundar sobre el tema porque los argumentos están contenidos en el proyecto, se manifestó a favor y sugirió precisar que sí existe una temporalidad que deriva del sistema penal aplicable más que de una norma expresa.

El señor Ministro Pérez Dayán manifestó que el hecho de aprobar los tres primeros considerandos y que el primero establece la competencia del Tribunal Pleno y que ésta se fija en función de la constitucionalidad del artículo 124 y en todo caso en un criterio, implica abandonar otro, aislado, del propio Tribunal, haría suponer implícitamente que el tema a tratar es precisamente el de fondo. De esa manera, si el argumento de que el agravio es inoperante en función de que no hubo tal aplicación sino que todo queda en función de si aquella tesis era o no aplicable, no existiría el tema de competencia.

Estimó que la competencia del Tribunal Pleno se funda específicamente en que debe determinarse la constitucionalidad de un artículo que ya se había analizado, de suerte que si esa no es la razón de la reasunción de competencia fuera o no correcta, si se está ante la inoperancia, la competencia tendría que haber sido originalmente de la Primera Sala.

El señor Ministro Aguilar Morales se pronunció a favor del proyecto y con lo expuesto en relación con los antecedentes históricos y los orígenes de las normas.

Estimó que si bien existen cuestiones técnicas como las mencionadas por los señores Ministros Luna Ramos y Pérez Dayán, es importante aprovechar la oportunidad para que el Tribunal Pleno se pronuncie sobre la constitucionalidad de la

norma, tal como se plantea en los agravios y que se reconoce ha sido aplicada.

Estimó que la inconstitucionalidad no se genera porque la norma establece la necesaria o importantísima relación de causa-efecto entre los hechos y sus consecuencias, sino que está implícito en el proceso penal el plazo dentro del cual se pueda establecer la probatoria correspondiente, la modificación circunstancial de las lesiones para convertirse en un probable homicidio, y será hasta que se formulen las conclusiones, el plazo final que determine el momento para poderlo hacer valer, por lo cual consideró más razonable establecer un plazo preciso para determinar que se cometió el delito, por lo que la relación atiende a las características de la técnica médica moderna, la cual permite establecer realmente la causa-efecto entre los hechos y la consecuencia final.

Por ende, se inclinó por la propuesta y refirió la conveniencia de modificar la jurisprudencia del Tribunal Pleno.

El señor Ministro Presidente Silva Meza una vez que aludió a su participación en la aprobación del criterio en comento, cuyo abandono se ha propuesto así como a los criterios de clasificación de las lesiones en función de la gravedad, a los textos relativos en los que se expone la solución en lo correspondiente al homicidio por una lesión considerada como mortal en función de su gravedad,

Sesión Pública Núm. 5

Jueves 10 de enero de 2013

manifestó no compartir las razones del proyecto en cuanto a que se trata de un criterio antiguo, ya que no por antiguo deja de ser constitucional o inconstitucional.

Cuestionó sobre el tiempo razonable para determinar que existe una relación causa-efecto entre la lesión inferida y el resultado producido. Hizo énfasis en el actual conocimiento e interpretación constitucional de los temas penales e indicó que el sustento fundamental de la tesis que se pretende abandonar se hace en la vulneración de la garantía de exacta aplicación de la ley, que comprende no solamente los actos, sino la ley en sí misma; es decir, en la vulneración de la adecuada defensa, lo que en última instancia, tendría un asidero constitucional.

Reiteró que no comparte algunas consideraciones del proyecto por lo que formulará voto concurrente para explicar las razones por las cuales sostuvo la tesis y el nuevo entendimiento que debe tener el alcance de las herramientas con las que se cuenta para interpretar los preceptos constitucionales en el tema concreto.

Sustentó que el hecho de que exista un término implícito sujeto a las reglas del procedimiento penal, hace razonable considerar que no hay vulneración a la adecuada defensa.

Agregó que votaría con el sentido del proyecto con algunas salvedades que expresará en un voto concurrente.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó que elaboraría voto concurrente en relación con la parte que se refiere a que se trata de los mismos supuestos que tomó en cuenta el Tribunal Colegiado de Circuito.

Aclaró que la competencia se surte por tratarse de un recurso de revisión en el que se impugna la constitucionalidad de la disposición que se analiza por el Tribunal Pleno en virtud de la petición específica del recurrente.

Indicó que la cuestión relativa a que los agravios son inatendibles queda superada porque se está de acuerdo en que se analice el fondo sin tomar en consideración la parte técnica.

En relación con el fondo del asunto, señaló estar de acuerdo con la propuesta, ya que es correcto determinar la constitucionalidad del precepto sin establecer una temporalidad por las razones mismas que da el proyecto en función de la relación de causa-efecto. Indicó que no existe obligación de establecer ninguna temporalidad, porque una persona puede fallecer en un tiempo indeterminado, con motivo de una situación ligada a la lesión correspondiente.

Sostuvo que es importante determinar la temporalidad y la duración del proceso. Indicó que formulará salvedades en relación con las consideraciones que se sustentan en la página cincuenta y seis, al no estar de acuerdo en que se aborde el fondo del asunto con fundamento en el artículo 76

Sesión Pública Núm. 5

Jueves 10 de enero de 2013

bis, fracción II, de la Ley de Amparo y, además, se aparta del contenido de la página cincuenta y siete, que declara infundado el concepto de agravio, analizando en primer término el artículo 7º, apartados 1 y 2, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se analiza en forma oficiosa.

En relación con la temporalidad, propuso agregar en el proyecto que el momento en el que puede reclasificarse el delito es cuando el Ministerio Público formula sus conclusiones.

Indicó no estar de acuerdo con la interpretación contenida a partir de la página setenta y ocho del proyecto, en el sentido de que “será en la averiguación y proceso que se instaure, en el que se puedan aportar los medios de defensa respecto del nuevo delito que se estime cometido, el cual será acumulado y en su caso resuelto en una sola sentencia”, toda vez que debe abrirse una nueva investigación si se tratara de hechos distintos, pero no podría haber acumulación. Asimismo indicó no compartir las consideraciones contenidas en la página setenta y ocho en relación con la interpretación del artículo 19 constitucional.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea aceptó suprimir el término antiguo aduciendo que no se refiere a la temporalidad sino a la relación en cuanto a los avances de la medicina. Indicó que analizaría cualquier observación o

Sesión Pública Núm. 5

Jueves 10 de enero de 2013

comentario y, en su caso, haría la modificación correspondiente.

En relación con lo expuesto por la señora Ministra Luna Ramos refirió que incorporaría lo relativo a las conclusiones, respecto de las cuales el señor Ministro Pardo Rebolledo anunció que las agregaría también a su proyecto. Señaló que si el Pleno así lo considera, suprimiría las consideraciones contenidas en la página setenta y ocho y que con los ajustes indicados sostendría su proyecto.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena manifestó su conformidad con el proyecto. Indicó que no estima que la temporalidad sea un requisito constitucional y que la temporalidad que se incorpora en el proceso es derivada de la garantía constitucional *non bis in idem*.

El señor Ministro Aguilar Morales reiteró estar de acuerdo con la propuesta así como con la observación de la Ministra Luna Ramos en relación con la oportunidad de volver a juzgar por los mismos hechos, ya que es una cuestión que no está en el estudio de fondo, por lo que si se elimina estaría de acuerdo con el proyecto y si no, se apartaría de esas consideraciones. Indicó que también se apartaba, como la señora Ministra Luna Ramos, de la interpretación de convencionalidad.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas manifestó que después de haber escuchado las intervenciones de los señores Ministros votaría en contra y

formularía un voto particular, no por desconocer los avances médicos, ni por tratarse de una realidad distinta, sino porque la norma es inconstitucionalidad por violación al principio de exacta aplicación de la ley.

Sometida a votación la propuesta modificada del proyecto, consistente en negar el amparo al quejoso al resultar infundados los agravios, se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, con salvedades; Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, con salvedades; Valls Hernández, Pérez Dayán, y Presidente Silva Meza. La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas votó en contra y por la concesión del amparo al quejoso reservando su derecho para formular voto particular.

La señora Ministra Luna Ramos reservó su derecho para formular voto concurrente y los señores Ministros Aguilar Morales y Presidente Silva Meza para formular sendos votos aclaratorios.

Siendo las trece horas el señor Ministro Presidente Silva Meza decretó un receso y a las trece horas con veinticinco minutos reanudó la sesión.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando quinto “ii) Análisis de la constitucionalidad de los artículos 121 y 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito

Federal”, en cuanto sustenta la propuesta consistente en declarar infundados los agravios en los que se expone que el Tribunal Colegiado de Circuito no explica por qué equipara la no rigidez del sistema de separación de poderes, con la autorización para confundir plenamente las funciones de los distintos poderes en un mismo funcionario.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea manifestó que su proyecto propone declarar infundado dicho agravio, pues el órgano de control constitucional de primer grado, expuso las consideraciones por las cuales arribó a la conclusión de que los artículos 121 y 122, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, no violan el artículo 49 de la Constitución Federal.

Sometida a votación la propuesta del proyecto, en votación económica, se aprobó por unanimidad de once votos.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando quinto “iii) Análisis de los agravios vinculados con la pretendida interpretación constitucional (duda razonable, prueba ilícita y atipicidad)”, en cuanto se determina declarar infundados los agravios en los que se aduce que el Tribunal Colegiado del conocimiento omitió realizar la interpretación constitucional que le fue solicitada (defensa adecuada), así como que en el caso subsisten temas de constitucionalidad que deben ser

Sesión Pública Núm. 5

Jueves 10 de enero de 2013

dilucidados por este Alto Tribunal (duda razonable, prueba ilícita y atipicidad).

Sometida a votación la propuesta del proyecto, en votación económica, se aprobó por unanimidad de once votos.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Silva Meza el secretario general de acuerdos dio lectura a la propuesta de puntos resolutivos los cuales son del tenor siguiente:

“PRIMERO. En la materia de la revisión, competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma la sentencia recurrida.

*SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, en contra de las autoridades y actos precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria”.*

Por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, se aprobaron los mencionados puntos resolutivos. La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas votó en contra.

El señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

A continuación el secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto:

II. 2. 277/2012

Amparo directo en revisión 277/2012 promovido por ***** en contra de la sentencia dictada el 14 de abril de 2011, en el toca penal 1159/2010, por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí. En el proyecto formulado por el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se propuso: *“PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***** , en contra de las autoridades y por los actos que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria”*.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo expuso los antecedentes y una síntesis de las consideraciones de su proyecto en cuanto se propone declarar infundados los agravios en los que se sostiene la inconstitucionalidad del artículo 108 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, por considerarlo violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, consagrada por el artículo 14 de la Constitución Federal, toda vez que aun cuando expresamente no fija el lapso o término dentro del cual una lesión debe ser considerada mortal, implícitamente lo

contiene, en vista de que será aquél en que se desarrolle el proceso y se dicte sentencia, porque después del fallo no podrá instaurarse juicio contra el procesado por lesiones u homicidio por los mismos hechos que ya fueron juzgados si el lesionado fallece, sin que la omisión citada tampoco provoque incertidumbre y genere falta de certeza en la aplicación de la norma, porque expresamente prevé que la muerte del pasivo debe ser consecuencia directa de la lesión causada por el victimario, dado que no se propician riesgos de confusión al momento de tipificar la conducta delictuosa e imponer la pena consiguiente, ni se menoscaba la garantía de defensa del procesado.

Señaló que en el engrose incorporaría las modificaciones aceptadas por el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea en el amparo directo en revisión 947/2011.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno los considerandos primero “Competencia”; segundo “Oportunidad del recurso”; tercero “Procedencia del recurso”; y cuarto “Cuestiones necesarias para resolver el recurso”, los cuales se aprobaron por unanimidad de once votos.

En relación con la propuesta modificada, a consulta del señor Ministro Presidente Silva Meza los señores Ministros ratificaron sus votos emitidos al resolver el amparo directo en revisión 947/2011.

Por tanto, el asunto se resolvió por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, con salvedades; Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo; Aguilar Morales, con salvedades; Valls Hernández, Pérez Dayán, y Presidente Silva Meza. La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas votó en contra y por la concesión del amparo al quejoso reservando su derecho para formular voto particular.

El señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Asimismo, convocó a los señores Ministros para la Sesión Pública Ordinaria que se celebrará el lunes catorce de enero de dos mil trece, a partir de las diez horas con treinta minutos, en la que comparecerán sesenta candidatos a Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de estar en posibilidad de integrar las quince ternas a que se refiere el Acuerdo General 11/2012, y levantó la sesión a las trece horas con cuarenta minutos.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.